CUADERNOS ROJOS

AÑO IV
MAYO 74

nº 8



DESPUES deL ASESINATO DE SALVADOR PUIG ANTICH

SOBRE EL "CARRERAZO" Y SUS CONSECUENCIAS

PROCESO "1.001"

Y LUCHA ANTIRREPRESIVA

DESPUES DEL ASESINATO DE
SALVADOR PUIG ANTICH

La dictadura del capitalismo español sigue cobrando víctimas. Y no sólo en la calle, reprimiendo la lucha de las masas obreras y populares. Salvador Puig Antich, militante del Movimiento Ibérico de Liberación, ha sido asesinado fría y premeditadamente en la cárcel de Barcelona, como en los más tenebrosos momentos de la postguerra. Simultaneamente, era también asesinado el polado Heinz Chez, cuya vida de marginado social había de acabar sirviendo a la sangrienta "justicia" burguesa para subrayar la condición de Puig Antich como enemigo de la propiedad y de las fuerzas del orden. Unidos los dos asesinatos por un denominador común "delictivo", quizás esperaban sus autores desvirtuar el carácter de instrumento de represión política de la pena de muerte contra Puig Antich. Para nosotros, que ninguna concesión tenemos que hacer ante esta "justicia"burguesa, los dos asesinatos permanecen unidos: Heinz Chez es también una víctima solitaria y absurda de la represión capitalista, de la lucha de clases en definitiva.

El gobierno de Arias ha asestado su golpe criminal cuando había logrado atraer la atención del país con sus propuestas "aperturistas", atención que se ha convertido en rechazo y desconfianza por parte de sectores de pequeña y media burguesía interesados en la maniobra del estado del capital monopolista para intentar ampliar su base social. Sin embargo, el gobierno no dió muestras de vacilación a la hora de optar entre mantener el espejismo aperturista o romperlo, agudizándo sus antagonismos políticos con sectores sociales no precisamente proletarios, entre los cuales, los asesinatos habían de contar con una repulsa total. Aünque la acción comporte un error político a corto plazo, no podemos atribuir la decisión de matar a Puig Antich solo a ésto, por muy evidente que pueda parecer la falta de rodaje del gabinete Arias a estas alturas. Hablamos de error a corto plazo, porque a largo plazo, le queda tiempo al estado capitalista para iniciar recomposiciones que le permitan establecer relaciones más sólidas con el resto de la sociedad que la sola represión. Lo que es evidente, es que cuando más tiempo permanezca aislada en el poder, más difícil será luego para la clase dominante iniciar aperturas. Sin embargo, en este momento concreto, cuando el "aperturismo" previsto puede aún no ser más que una reordenación de las fuerzas presentes en el poder político y económico, para hacer más flexible una forma de estado excesivamente rígida y monolítica, cuando la incorporación de otras fuerzas procedentes de la media y pequeña burguesía es solo un proyecto de cuya eficacia cabe dudar, el mantenimiento del aparato represivo en su lugar preponderante es aún totalmente imprescindible para la dictadura del capitalismo. Máximo ante la necesidad de hacer frente a una situación económica desfavorable con posible derivación hacia una crisis en la cual el aparato represivo será la única garantia para mantener el orden social. Ante tal coyuntura, continuar la acumulación violenta de capital significa para la burguesía monopolista el incremento de la sobreexplotación de la clase obrera y medidas que van a ahogar aún más a la pequeña burguesía, lo cual, por sí solo, ya dificulta un juego aperturista con mayores pretensiones que la simple recomposición de los sectores políticos hasta ahora presentes en el régimen. Asesinar a Puig Antivh, en estas condiciones, si bien hundía la credibilidad de las promesas gubernamentales, contribuía a mantener bien dispuesto un aparato represivo que no puede resignarse a ser atacado sin responder y que, hoy por hoy, es absolutamente prioritario para poder realizar los planes de la burguesía monopolista.

Arias podía estar hipotecado, con su historial como policía, a la hora de llegar al poder, sobre todo tras los desmandos policíacos consiguientes al 1º de Mayo en Madrid; pero ningún gobierno burgués en España podría ahora hacer oidos sordos a las exigencias del aparato represivo.

Por otra parte, la quietud de la oposición en el período comprendido entre el Consejo de Guerra y el asesinato, pudo hacer creer al gobierno que podía pasar a los actos sin que las cosas se salieran excesivamente de madre. Aquí es donde interviene el reformismo del P.C.E., B.R. y afines como fuerzas políticas que dan vía libre al asesinato, al excluir la movilización previa a éste como una necesidad ineludible de la lucha antirrepresiva. Tras el lamentable ridículo del proceso 1001, la desorientación en que le sumió la ejecución de Carrero, el desbarajuste de la Asamblea de Cataluña tras su "brillante" caída masiva, solo le faltaba al reformismo su inhibición ante el caso de Puig Antich para desautorizarse a sí mismo como dirigente del movimiento obrero y popular. La justificación reformista es la habitual: Puig era un anarquista, un pequeño burgués que actuaba al margen de las masas. Lo que no dicen los reformistas es que a sus presuntos aliados burgueses, tan demócratas ellos, no les hace ninguna gracia quienes atentan contra la propiedad privada, las fuerzas del orden burgués y pongan sobre la mesa el tema de la necesaria violencia revolucionaria (prescindiendo de que lo hagan correctamente o no). Disponiendo el reformismo de las mayores posibilidades organizativas existentes para lanzar la movilización contra el asesinato, su inhibición fué la firma accesoria a la sentencia contra Puig Antich. Por desgracia, una vez más se ha visto también la impotencia y la incapacidad de la izquierda para dirigir por sí misma cualquier lucha, quitándole la iniciativa al reformismo.

Al no existir en este caso una relación directa entre los luchadores reprimidos y la lucha de masas y no darse, en consecuencia, amplias luchas populares masivas como en el caso del proceso de Burgos, el P.C.E. no tenía ninguna rentabilidad política a extraer de este asunto. Solo Bandera Roja se subió al carro de las luchas ya en marcha, tras el asesinato, haciendo uno de sus habituales alardes de oportunismo. Después haría otro alarde de desmovilización intentando reducir al movimiento estudiantil, tan activo en la semana siguiente al asesinaro, a un triste gestor de problemas estrechamente académicos.

Impulsar la lucha contra el intento de matar a un camarada en la lucha anticapitalista, no excluye la discusión y la crítica hacia planteamientos con los cuales no compartimos todos sus puntos de vista. Lo que es inadmisible es adoptar una postura semejante a la del enemigo de clase, como hace Carrillo cuando agita el espantajo de la anarquía y el desorden en defensa de su línea pactista, pacifista y burguesa a fin de cuentas.

A pesar de la inactividad previa al asesinato, reforzada por la creencia en un indulto compartida por los reformistas (que por lo visno no han sabido analizar porque no se mató a los procesados en Burgos), el estupor causado por la confirmación de las muertes a garrote dió paso a una semana de luchas de magnitud considerable. El balance de dicha semana nos da los siguientes rasgos fundamentales:

1º.- La práctica ausencia del Movimiento Obrero organizado, evidenciando su crisis actual. Los paros realizados con motivo del asesinato de Puig Antich han sido aislados y desorganizados, imposibilitando la iniciativa proletaria en la lucha. Buena parte de ellos se han superpuesto a la lucha reivindicativa en curso en las fábricas en cuestión. La desorganización del Movimiento Obrero dirigido por los reformistas, añadida a sus opciones políticas en este caso, son los culpables de esta ausencia fundamental. Ciertos sectores no reformistas, haciendo abstracción de la violencia inherente al capitalismo espñaol, al no hacer de la lucha contra el asesinato el centro de su actividad en aquel momento, han demostrado su incapacidad política para romper el estricto marco de la lucha de fábrica no asumiendo su papel de clase dirigente ante el conjunto de clases populares.

2º.- El carácter pequeño-burgués de las masas, derivado de los elementos mayoritariamente participantes en las mismas. Al mismo tiempo que señalamos su carác

ter de clase, debemos constatar la amplitud de las mismas abarcando los paros, sentadas, declaraciones, amén de las manifestaciones en la calle, a gran cantidad de centros y sectores que, por primera vez, han hecho acto de presencia en las luchas o que lo han hecho de forma más importante y violenta. El papel de los técnicos, personal de hospitales y escuelas o los paros de lugares tales como una escuela de bibliotecarias o ESADE, confirman esta afirmación. No vale esgrimir la matización de que tales sectores se movían sentimentalmente impulsados por su horror hacia la pena de muerte, puesto que al carecer de la presencia del proletariado al frente de las luchas, al no existir una dirección política revolucionaria de las mismas, no podía exigirse a la pequeña burguesía que asumiera posiciones que, espontaneamente, no puede tomar porque no le son propias. Junto a las movilizaciones, hay que señalar el ambiente que se ha percibido a nivel epidérmico dentro de estos sectores, situándose decididamente en contra del estado del capitalismo español y desenmascarando sus maniobras recientes tendentes a la ampliación de la base social del régimen, las cuales, tras causar cierto impacto, han caído en el descrédito más absoluto. Lo cual señala las posibilidades objetivas, para el proletariado, de establecer las necesarias alianzas con las clases populares, bajo su iniciativa.

3º.- La realización de las acciones de la calle y otras movilizaciones sin contar con los resortes organizativos tradicionales, lo cual no impidió la amplitud de las luchas. Señalando el papel aglutinante que el movimiento estudiantil ha desempeñado como vanguardia de esta masa pequeño-burguesa, no deja de sorprender, viendo los resultados, que el reformismo no aprovechara mejor esta oportunidad de capitalizar la lucha en su favor aunque fuera desvirtuándola a posteriori. B.R., como decíamos, ha intentado esto. Una vez más, como en El Ferrol, en Vigo, en Pamplona, etc., la iniciativa de las masas ha demostrado la agudeza de las contradicciones existentes, que no pueden ser dirigidas hacia una lucha coherente por el socialismo debido a la ausencia de una estrategia correcta y de una verdadera vanguardia revolucionaria.

Habría que añadir a estos rasgos, que la exasperación popular en el momento de responder al asesinato de Puig Antich se veía incrementada por las medidas económicas tendentes a aumentar la inflación y haciendo pagar a las clases populares el coste del desarrollo capitalista, lo cual crea una situación de conjunto favorable al desarrollo a la radicalización de la lucha anticapitalista y a la materialización de la conexión de la clase obrera con sus aliados, cuyo obstáculo siguen siendo las carencias políticas señaladas en el párrafo anterior.

Todo lo dicho viene a poner de relieve, una vez más, la urgente tarea de los revolucionarios en superar las incapacidades, simplismos y divagaciones actuales de la inzquierda para emprender la difícil labor de levantar una alternativa a la hegemonía reformista que, con sus ilusiones y traiciones, permite que la burguesía pueda seguir asesinando impunemente.

ACERCA DEL "CARRERAZO" Y SUS CONSECUENCIAS

"En el proceso de descomposición y desmantelamiento de una dictadura personal como la de Franco (sobre todo cuando al desgaste del sistema se agrega la ruina biológica del dictador), surgen momentos complejos, contradictorios, "misteriosos" que"se cuecen" en círculos muy restringidos. Pero es imprescindible tener en cuenta estos factores, porque influyen sobre la situación".

(Santiago Carrillo en la Conferencia de Bruselas de las Pc´s de Europa. Mundo Obrero, 13-2-1974, pag. 1)

"Puig Antich estrangulado. Como en la edad media. Como en tiempos de la Inquisición. Por otra parte, en España la Inquisición está todavía en vigor. Con Franco se ha convertido en una institución civil y laica, una forma de gobierno".

(Libération. nº 183, 4-3-74, pag. 1)

La dinamitación de Carrero Blanco y el asesinato de Salvador Puig Antich en la Modelo de Barcelona son dos hechos que componen la apertura y el cierre de un ciclo, un ciclo muy breve pero rico en sugerencias políticas. Este ciclo es, a su vez, en su conjunto, el préntesis que abre la etapa del posfranquismo. Una etapa cuyo común denominador con la larga fase anterior es la sangre. Así, el posfranquismo, con sus raíces rojas aún de la sangre popular intensamente derramada a lo largo de la etapa propiamente franquista, cobra nueva y siniestra savia.

La ejecución de Carrero

La dinamitación de Carrero Blanco convulsionó políticamente al país. Sólo políticamente. Ni socialmente ni económicamente puede hablarse siquiera de ligero temblor. La acción, más o menos explícitamente condenada por los grupos reformistas, se encuentra perfectamente delimitada por el análisis político marxista-leninista, en el sentido de que un atentado individual no cambia una formación social. Esto es indiscutible. Pero también queda muy claro que acciones de este tipo pueden modificar un panorama político, poner de manifiesto las contradicciones en el seno del poder capitalista y, por descontado, clarificar la situación, los límites y las contradicciones de la oposición (reformista, revolucionaria o del propio sistema), su capacidad de iniciativa política. En esto radica, - pues, el resultado general del atentado, en tanto crea una nueva situación histórica que permite pulsar la realidad política en el territorio del Estado español a todos los niveles.

Sólo desde un punto de vista oportunista o miope puede afirmarse que la voladura de Carrero fue un hecho nefasto. A estas alturas del siglo, queda de "buen tono" políticamente llenarse la boca de violencia de masas entre reformistas -que son los primeros en frenarlas cuando les des-

bordan en la práctica- y entre la izquierda supuestamente no reformista -que somos incapaces de movilizarlas cuando más necesario lo hace la realidad política de la lucha de clases. A los actos y atentados terroristas se les niega el pan y la sal de un modo absolutamente abstracto y genérico (excepto cuando se producen fuera de aquí): nos remitimos a los "clásicos" (que los analizaron conforma a una situación concreta) o a la "estrategia socialista" (que se ve como un decálogo del que es deducible la intervención táctica en cada momemto determinado). Pero, en el caso concreto del carrerazo, se olvida: 1) que el aniquilamiento de verdugos por parte de las organizaciones de vanguardia del País Vasco (y, concretamente, de ETA) es un hecho perfectamente asimilado y ligado a la actividad política de las masas vascas, que no ven en ello un apocalipsis derivado de quien como los reformistas tienen por el Estado capitalista un respeto sacrosanto. Es en relación con esas masas con quien debe verse, en primer lugar, el objetivo de la ejecución, antes de hablar de si las masas comprenden o no tales actos, del mismo modo que los actos terroristas palestinos son apoyados y asimilados por unas masas que no sustituyen su lucha política por el terrorismo, sino que lo complementan y la ayudan a escala internacional mostrando su ejemplo a todas las masas oprimidas; 2) que, a nivel de todo el territorio del Estado español, la muerte de Carrero ha actuado como un acto "liberador" que hunde sus raíces en los deseos de un pueblo oprimido que no ha encontrado todavía armas para liberarse por sí mismo, pero que ha visto por sus ojos el desconcierto y el miedo por parte de sus opresores; de ahí, los actos individuales o colectigos de regocijo cuando la ejecución del siniestro almirante; 3) que, precisamente, por la naturaleza del acto -desligado de la actividad política de las masas a escala de todo el territorio del Estado español- era más impresdindible que nunca valorar el hecho y actuar en el sentido de restar capacidad de maniobra a la burguesía contra las masas populares y afianzar entre éstas la unidad y la cohesión frente al enemigo, que presentaría el hecho ante todo el pueblo como un acto subversivo, criminal, etc., y no como un acto político (de masas o no). ¿Alguien ha olvidado los años que está pasando el pueblo vasco, con un permanente estado de guerra civil, por obra y gracia de burguesía? ¿Alguien ha olvidado la criminal aplicación de la ley de fugas por la Guardi Civil? ¿Alguien ha olvidado como murieron Etxebarrieta -a bocajarro- o Mendizábal -como una bestia acorralada-? ¿Alguien ha olvidado, en fin, Erandio, Granada, Madrid, Barceloma, Eibar, El Ferrol o San Adrián? Entonces, si alguien ha olvidado, hasta el punto de hacer llamada a una "combinación de hombres (!), no importa lo que sean sus colores (!!!)" (PCE), no merece llenarse la boca reclamando para si encabezar a las masas españolas, porque éstas, aunque no se lo parezca, tienen una muy fina memoria histórica...

Ahora bien, es probable que, políticamente, el carrerazo comience a ser (o sea ya en este momento) el canto de cisne de ETA-V, porque su momento está pasando: las masas no pueden apoyar indefinidamente un esfuerzo militar sin una conducción política que trate de resolver sus problemas en todas las instancias. No es el esfuerzo militarista el que debe presidir la lucha de masas por delante de la dirección política, sino al revés, es ésta la que ha de conducir la lucha armada (recordemos, sin ir más lejos, el ejemplo del MIL), y esto sí que es un legado universal de los "clásicos".

Nuevas fuerzas de clase pugnan por abrirse paso en el País Vasco para hacerse con la hegemonía en la doble dirección que reclama la situación: contenido de clase de la lucha contra la burguesía (lucha anticapitalista) y asunción del problema nacional como algo indisolublemente ligado a aquella, como algo resoluble solamente en el socialismo, quitando de las manos de la burguesía media y la pequeña burguesía la jefatura de un movimiento que sólo una clase revolucionaria y decidida como el proletariado puede conducir a buen puerto. Sin embargo, -y es ahí donde reside la superficialidad o el olvido de los anatemizadores habituales- sólo asumiendo críticamente la evolución de los últimos años en el País Vasco, -la trayectoria de Eta y su relación con el movimiento popular, las raíces de clase de la lucha nacional, sólo así, decimos, las nuevas fuerzas del movimiento obrero pueden, ciertamente, dotarse de un patrimonio político nuevo (por su sentido crítico y por su enraizamiento entre el proletariado).

El proletariado vasco no puede constituirse en clase hegemónica en su país sin hacerse con el indispensable patrimonio de esfuerzos, luchas, éxitos y frustraciones del problema nacional: éste es su problema político, pues la pequeña burguesía y los intelectuales de ésta o de la burguesía media debem ser integrados estratégicamente en la perspectiva socialista por el proletariado, precisamente a partir de la correcta resolución de la cuestión tanto a nivel teórico-estratégico como en la intervención política cotidiana. Entonces, podrá comprenderse, quizás, el carrerazo no tanto como un acto de desespero o de venganza, como una respuesta ética, sino como un problema ligado a la evolución política del País Vasco y un resultado políticamente "lógico" de la historia de ETA en los últimos años -que, una vez más, como en 1970, ocupa la escena política de todo el territorio del Estado español y obliga a catuar, positiva o negativamente, al movimiento popular y a las organizaciones que en él trabajan.

Por otra parte, es obvio que el terrorismo no puede sustituir a la lucha política de masas; sin embargo, según el objetivo a que apunta (un cohesionador como Carrero, en un momento de transición en la cúspide del Estado capitalista) y el momento elegido (seis meses justos de rodaje como presidente del gobierno y sin en equipo "doctrinalmente" coherente) puede complementarla o aclarar el espectro político -como decíamos arriba- y sus resultados históricos deben valorarse como tales, y no desechados en nombre de principios abstractos y de condenas ortodoxas. Un acto terrorista dificilmente afecta a la estrategia de una clase cuando esta posee, efectivamente, una estrategia y una fracción organizada en su seno (en el estado, o en el nucleo o partido político que aspire a dominarlo y ponerlo al servicio de la misma) que vaya articulándola con los virajes tácticos necesarios para modificarla y/o enriquecerla. La muerte de Carrero es, en este sentido, un problema de <u>recomposición táctica</u> para la burguesía.

Es inutil, pues, hacer alarde de aceptar y aplaudir el atentado en sí por el sujeto ajusticiado y atacarlo seguidamente como un hecho que ayuda o deja de ayudar a la "estratégia socialista" y a la"lucha revolucionaria de las masas" porque lo que ayuda de verdad es la <u>colocación relativa</u> de cada clase al producirse el hecho, y no las consideraciones sobre el mismo desprovistas de su estrecha relación con una <u>nueva realidad</u>.

La burguesía, por ejemplo, recompuso su situación interna aglutinando un nuevo equipo en el Poder; trató de atarse a todos los sectores no ligados directamente al mismo y cerró filas en torno al estado franquista. El proletariado, en cambio, asistió perplejo al acontecimiento -hablamos del proletariado como clase antagónica de la burguesía y que se ve como tal desde un punto de vista político -cuando lo que necesitaba era cerrar tambien filas:
1) manifestando su apoyo y solidaridad de clase con sus hermanos -reformistas- que, en aquel mismo momento, eran juzgados y se convertían en víctimas propiciatorias de la confusión con ciento sesenta años de prisión encima.
2) oponiendose a toda acción represiva posterior -como era esperable- ; el mes de enero de 1974 ha visto la caida de centenares de militantes del movimiento popular.
3) mostrando al resto del pueblo y, en particular, a la atemorizada pequeña burguesía, como la política de clase de la burguesía conduce a las masas populares oprimidas y explotadas a actos de violencia en legítima defensa cuando -si pasamos la cuenta de los veinte y pico de muertos en los últimos cuatro o cinco años- se ven, además, condenadas a prisión y baleadas en plena calle, sin piedad.

De este modo, podría hablarsede intervención táctica capaz de modificar, sobre todo a largo plazo, la relación de fuerzas (frenando a la burguesía, dividiendola, atrayendose a la pequeña burguesía) y, con ello, favorecer objetivamente una estrategia. Pero esto sólo es valido en los hechos, cuando se interviene en la práctica, y no cuando se analiza un acto como el atentado según una relación abstracta con la "estrategia socialista", pues ésta se ve implicada con toda la realidad política de la lucha de clases por muchas mediaciones que se nos puedan aparecer. En este sentido, el atentado nada tiene que ver directamente con la estrategia socialista, pero sí indirectamente porque se presenta como un "hecho actuante", que modifica la situación y obliga a tomar partido a las fuerzas sociales en presencia, bien para que materialicen su estratégia, hasta entonces elaborada, con la táctica que el momento requiere, bien para que se doten de un caudal de experiencia política respecto al Poder indispensable para ir acabando su estrategia. El proletariado no se ha enterado de este problema político. Y no es extraño porque, hoy por hoy, el proletariado español no se ve a sí mismo como clase dirigente (por lo menos, en acto) de un proceso revolucionario a escala de todo el territorio del Estado español (ni tampoco en ninguna de las naciones existentes en su seno), y obligado, por este motivo, a intervenir políticamente en todos los hechos que se dan en la escena política; este retraso deja todavía un margen de iniciativa muy grande a la burguesía española. No basta con que la clase obrera lleve a cabo una continuadad y vigorosa lucha reivindicativa (como se ha dado, en todas partes, el pasado año) ni que realice luchas ejemplares, ni que se enfrente violentamente con los lacayos de sus explotadores; además, hace falta intervenir, fundamentalmente, en la arena política de manera constante y sistemática, ya que sus posibles aliados esperan de ella directrices precisas en el combate político, y ella misma necesita darlas para consolidar, en cada momento concreto, las lianzas que lleven a la progresiva formación de un nuevo bloque histórico. Sin esto, la clase obrero continuará actuando según un esquema corporativo y estrecho, que le impedirá erigirse en auténtica clase dirigente para quedarse en el terreno de clase temida o incor-

diante, en clase siempre potencialmente revolucionaria. A los reformistas les falto tiempo para casi publicar a gritos su adhesión a la paz y tranquilidad reinantes -si hubiera sido un golpe de la extrema derecha se hubieran puesto a defender al actual gobierno como "moderado", tan - esclavizados están al terreno de juego que les impone la burguesía. La izquierda "no reformista" nos alegramos en nuestro fuero interno, nos - cargamos el oportunismo reformista pero, una vez más, como nos sucedería luego cuando el asesinato de Puig Antich, no supimos intervenir adecuadamente por miopia, intereses particlaristas y falta de relación con las masas (en su más amplio sentido). Pero, ¿que hacía entre tanto la burguesía?.

El resultado político del carrerazo

El gran revés que con el carrerazo ha sufrido la política reformista ha sido la manifestación ostentosa de que la dictadura que existe en España no es la dictadura de una clique política ("los del Pardo", como - afirmaba todavía el PCE en su nefasto chiste-documentoXX tras el asesinato de Puig), la dictadura de un grupito atrincherado en el famoso bunker; ni siquiera el coto privado de un núcleo político (Opus Dei) de la fracción hegemónica de la burguesía. Por el contrario, los hechos acaecidos desde la muerte de Carrero hasta el discurso de Arias, las nuevas medidas en Educación, el asesinato de Puig Antich, el modo de tratar la crisis económica y, en fin, el propio caso Añoveros, revelan que la burguesía como clase (con maticos de menor relieve en su seno, y pocos peligrosos a medio plazo) ve en la dictadura franquista y en el complejo XXXXXXXXXX de su herencia postfranquista la traducción política de su dictadura de clase.Por este motivo, el nuevo equipo de gobierno hereda como propios una serie de problemas que el conjunto de la clase quiere ver resueltos (Educación; relaciones Iglesia-Estado; aparatos represivos dominantes; "aperturismo") como garantía de equilibrio entre los distintos núcleos de la fracción hegemónica; expansión ecómica a ultranza, etc.) y arbitra nuevas medidas para conseguirlo (con mayor o menor fortuna, pero es propio de todo gobierno) recogiendo la experiencia política de la clase burguesa en los últimos años y tratando de dar pasos adelante, inaugurando el postfranquismo (políticamente hablando, es decir, eliminando de facto el carisma de la Momia como foco cohesionador).

La voladura de Carrero Blanco ha significado el desalojo del Opus Dei del poder político. La Mafia Blanca, dirigida por Lopez Rodó, ha jugado en los últimos 15 años un papel de capital importancia en todos los sectores del territorio del Estado Español, partiendo de que supo crear para la burguesía española las condiciones necesarias para la gestión de una sostenida y violenta acumulación de capital en un momento decisivo para su inserción en el mundo capitalista desarrollado. Desde esta aportación, la labor del Opus intento mayores avances planteandose la ambiciosa tarea de comenzar los cambios necesarios en la superestructura - -en unos aspectos (Ley Oragánica del Estado, Ley de Prensa) apoyado y con la directa contribución de otros núcleos de la fracción hegemónica; en otros aspectos (aspectos económicos y jurídicos de la superestructura, Ley de Educación) casi por su cuenta y riesgo exclusivamente. Estos cambios en la superestructura -el principal de los cuales es la edificación del juancarlismo en el plano ideológico-político- han tenido importancia, pese ha que han quedado algunos a medias y otros se hayan visto desbordados o aplazados: la XXX propia Ley de Educación, la nueva ideología

tecnocrática-consumista, la progresiva eliminacióna del Ejercito como institución política de primer plano y la introducción del "civilismo" en los aparatos del Estado (particularmente, en el gobierno), la "apertura al exterior", la racionalización económica de algunos sectores estatales (INI), el replanteamiento de las relaciones Iglesia-Estado. Sin embargo, el fracaso"relativo" del Opus -en su intento de adecuar el Estado a la nueva - complejidad de la sociedad- tiene sus raíces en la contradicciónentre - sus ambiciosos propósitos (cambiar de arriba a abajo casi todos los aparatos del esatdo) y el espíritu de clan -en el seno de la fracción hegemónica de la burguesía- que animaba a sus dirigentes. Pero, con todo, esa es una contradicción interna a la burguesía (su evidencia más patente se tuvo a xxx raiz del caso Matesa en 1969) que, de uno u otro modo (la formación de un gobierno monocolor al seguido de Matesa es una prueba), pudo resolverse; el desgaste del Opus procede, fundalmentalmente, de la lucha que le planteo a la burguesía el movimiento xxxxxxxxx obrero y popular desde mediados de los años 60 (alternativas reformistas al problema de la democracia, problema nacional vasco, lucha antirrepresiva, etc.) y de sus manifestaciones en el seno del Poder. El principio del fin de esta etapa habría que buscarlo en el proceso de Burgos contra los militantes de ETA (diciembre 1970) durante el cual la presión popular alcanzo simultaneamente, en multiples zonas y en la mayor paete de las masas populares, unos caracteres tan eficaces como inesperados. Fueron dias con sensación de vacio político (la burguesía perdió la iniciativa política) que situaron al Regimen a la defensiva frente al impetuoso movimiento de masas, cuyo resultado final - combinado con los elementos de presión exterior y del rapto del consul Beihl- fue la victoris que supuso la salvación de - los militantes vascos precisamente contranel más edicaz aparato del Estado franquista. Desbordado por la izquierda por las masas populares (es - dir, sin control posible sobre la seciedad "civil") y por la derecha por los grupos ultra fascistas (es decir, sin control sobre la sociedad "política", porque los sectores moderados esperaban ver al Opus bien entrabancado), el equipo opusdeísta comenzó a hundirse en las pantanosas aguas políticas del tinglado estatal llamado Movimiento. En junio de 1973, el - proceso se ha cerrado (la crisis económica de 1971-72, las fuertes luchas y duras represiones de 1970-73, la crisis del aparato educativo, los problemas Iglesia-Estado) y sólo Lopez Rodó aparece en el gobierno de Carrero. La combinación de crisis interna y de falta de control sobre el cuerpo social -intimamente ligados- está en la base de la crisis opusdeísta: es un equipo gastado. Pero lo que importa es resaltar que se trata de un núcleo político que - al margen de sus aspiraciones fraccionales- se plantea -en nombre de la burguesía, aunque los momentos de la intervención - sean más o menos apoyados por el conjunto de la clase - los problemas xxx <u>nuevos</u> de la superestructura (es decir, del nuevo dominio necesario) de tal manera que, si bien lega un manojo de ellos por resolver, lo hace de acuerdo con una <u>dinámica estratégica</u> que supera los límites del propio - opus: previsión y realización de los mecanismos sucesorios, recomposición de un aparato ideológico tan fundamental como el educativo en sus primeros compases,"modelación" de las masas a través de los medios de comunicación son<u>legados</u> a la burguesía como bloque y constituyen, por tanto, un pattimonio de la misma (fracasos incluidos). En este sentido, el gobierno de Arias -quierelo o no, y a salvo de su mayor o menor capacidad política- decimos que no es una "camarilla", o un "gobierno de grises", sino un equipo que articula las distintas instancias que han compuesto la política general de la burguesía en los últimos años. De este modo, la po-

lítica de la burguesía empieza ya, a partir del carrerazo, a trascender a las personas (a los carismas) y a los grupos "salvadores" o "apagafuegos" internos a la clase. Trasciende a las personas porque, luego de"educar" como cohesionador a Carrero, resuelve sin él (y con el vacio de su muerte) -por lo menos a corto y medio plazo- el grave problema del colapso que paralizó al Estado durante unos días, cierra filas (véase la reacción en un momento crítico de los "opositores" como Areilza y Ruiz Gimenez -que llevó el juicio 1001, con el visto bueno del Pce, a extremos grotescos y delirantes de "pactismo"-) o incluso se atrae a los reformistas a su terreno ("garantías" de que el PCE no iba a mover ni un dedo durante la crisis).Los nuevos "opositores" (el propio Opus o francotiradores, como Fernandez de la Mora) XXX estan neutralizados y no presentan mayores problemas en el orden estratégico. Trasciende a los grupos "salvadores" porque después de la crisis de junio de 1973 y la caida opusdeísta, Carrero quedaba como único timonel y encargado de articular un nuevo equipo y, sin lograrlo por "culpa"de su liquidación, deja un vacio que es llenado por una combinación escasamente cohesionada a título doctrinal, pero tremendamente eficaz a plazo medio -seguramente, por esa aparente ausencia de "doctrina", o de particularismo, tan característica del Opus-. Es eficaz porque combina, como decíamos, sin gran esfuerzo en el seno de la clase burguesa, los ejes alrededor de los que se ha movido su política en últimos años: garantiza totalmente la función del gran aparato represivo con expertos en los principales puestos y una política de especial atención -económica o ideológica- hacia las fuerzas represivas; introduce un equipo económico, bien entrenado y bien ligado a las palancas decisorias del capital monopolista y del gran capital internacional, para prosiguir el expansionismo a ultranza, en un terreno que parecía patrimonio de los tecnócratas opusdeístas; en fin, se cree capaz de esbozar un leve intento de lo que, a largo plazo, debería constituir un resorte de hegemonia política que disfrazase la brutal preeminencia del comportamiento represivo de la clase.

Así, pues, la burguesía respiró y creyó poder pasar a la ofensiva: nada iba a turbar el "orden público", Barrera era un aventajado continuador de la política desarrollista, Martinez Esteruelas iba a arreglar "politicamente" el desprestigiado ministerio de Educación haciendo pasar las líneas maestras de la nueva política educativa, el "aperturismo" o "asociacionismo" quitaba de en medio los malos años del exclusivismo opusdeísta (!como respiraron YA, ABC, LA VANGUARDIA viendo redompuesto el terreno propio de la actuación de las "familias políticas" de cara a un posible reparto de esferas de poder!) y podía utilizarse como espejismo ideológico de cara a esas "clases medias" para las que valen más mil palabras desde arriba que un solo acto liberador protagonizado por ellas mismas. Todo esto quiere decir que la burguesía se ha ido dotando de personal adecuado en los distintos aparatos del Estadopara garantizar una continuidad frente a crisis internas y una política general frente Movimiento Obrero y Popular, acumulando un caudal político desde los años en que la lucha de clases se las puso verdes cuando alcanzó parte de la misma esencia del dominio capitalista. Por un lado, la burguesía posee un punto nodal de referencia, fundamental para toda la clase (el estado juancarlista) y, por otro lado, favorecida por la escasa fortuna del proletariado en la erección de una política y de un partido revolucionario, ha podido cambiar en el Poder los grupos a su servicio sin que

se resintiera gravemente la coherencia última de su política.

Si algo se pone, pues, en evidencia, es cualquier pactismo inventado por las vanguardias reformistas "en nombre de la clase obrera" con los sectores burgueses no ligados directamente al Poder solo puede hacerse a costa de rebajar los objetivos de aquella, a costa de que dimita de su papel de futura clase dirigente del proceso revolucionario, en beneficio de la burguesía y a remolque de la misma. Por si todos los argumentos teóricos no hubieran sido duficientes hasta entonces, el carrerazo ha puesto de relive que el Pacto por la Libertad es humo de pajas y que equivoca, lamentablemente, tras años de inutil acción, saldados con el sacrificio de centenares y hasta miles de militantes pasados por el filtro de la siniestra "justicia" franquista, el autentico caracter de las alianzas que necesita el proletariado, y, por descontado, el sentido político de las mismas. Por otra parte, ya podemos ver como su instrumento político, la Assamblea de Catalunya, desprestigiada ya a marchas forzadas en los últimos meses después de su caida, principal arma organizativa del supuesto asalto pacifico al Poder, ha "dirigido" la lucha popular en un momento tan delicado y trascendental como el asesinato de Puig.

Compárese con el proceso de Burgos en el País Vasco (salvando todas las distancias) y saquense las conclusiones acerca del papel aquí de la dirección reformista, pero retengamos una fundamental: que sólo las actuaciones políticas dirigidas por el proletariado al frente del MP (como pasó en el País Vasco en diciembre de 1970) han dado lugar a crisis internas graves en el seno de la burguesía y han mostrado donde estaban los auténticos aliados del proletariado en acción. Cuando el proletariado no ha intervenido (como en el carrerazo y su desenlace, como en el proceso 1.001, como en el asesinato de Puig Antich) la burguesía adquiera gran iniciativa (para recomponerse, para quitar de la vista de las masas el problema del Poder, para desatar la represión a su gusto, etc.) porque el reformismo se mueve en terreno acotado por la hegemonía burguesa (el juego formal de quién detenta el Poder y de qué combinaciones pueden efectuarse en una mesa con judias -luego de leerse la prensa nacional desde París- para aislar a la "camarilla"); y el reformismo, a su vez, es, hoy por hoy, hegemónico entre las masas populares y, por tanto, correa de transmisión de la política burguesa (pacifismo, burocratismo, economicismo, etc.). Los casos citados lo demuestran palpablemente: cada vez que se planteaba directamente o indirectamente un problema relacionado con el Estado (o uno de sus aparatos, o una directriz del mismo para consolidarse), el reformismo tocando campanas. Sin embargo, retengamos también que las masas no esperan a moverse cuando les llame el reformismo, pero tampoco son capaces de resolver políticamente los numerosos enfrentamientos -dispersos, espontaneos, corporativos- en los distintos frentes de la lucha de clases, pues carecen de dirección proletaria consecuente y, a su vez, el proletariado carece de una política y de una organización que se erija en cabecera del MP. Luego de encabezar la lucha a la muerte de Puig Antich, las masas pequeño burguesas del MP acabaron en manos de las organizaciones reformistas -y, en algunos casos, como en el oficio religioso de San Andrés, donde sólo falto que Bandera Roja desfilara bajo palio, hasta las masas populares del barrio pudieron ser lastimosamente engañadas-. Del mismo modo, ese proletariado que tantas y tan importantes luchas ha desarrollado en los últimos años

en tanto que movimiento de clase, se muestra incapaz de entrar como clase políticamente consciente de su papel en la arena política en momentos indispensables, y nos referimos tanto al problema de la dirección como al de la actuación concreta.

Los límites interiores de la política burguesa

En momento de ruptura de una situación a otra y su aparentemente correcta resolución entusiasmo en exceso a la burguesía. Había pasado por una dificil coyuntura y olvidó que, al margen de los discursos, la lucha de clases no se planifica y alcanza todos los entresijos de la formación social. Por otra parte, puesto que las organizaciones políticas guardaban silencio a raiz del carrerazo o sancionaban con sus declaraciones (PCE) todo lo que hiciera la burguesía y el ejército "en nombre de la paz", dejaban púdicamente de lado los aspectos clasistas del proceso 1.001 y sentenciaban a priori lo de Puig Antich ("las masas no entienden esta clase de violencia"; "el gobierno no se atreverá a matarlo"; "es un pequeño burgués"; etc.), la burguesía creyo poder actuar impunemente en la tradición de sus mejores momentos, dando el espaldarazo político al aparato represivo en el postfranquismo, tratando de darse un respiro y atemorizar a las masas durante un plazo prudente (primeros meses de crisis económica y repercusión en alzas de precios, etc) y pensando que aquel "silencio" era el mejor síntoma de que la sociedad española puede tragarse, en 1974, un asesinato descarado y comulgar, al mismo tiempo, con la "ilusión de participar" del "aperturismo". Sin embargo, su principal destinatario -las masas pequeño burguesas tan - castigadas política e ideológicamente, y en los últimos tiempos, económicamente- tuvo ocasión (asesinato de Puig Antich, caso Añoveros) de - demostrar que al margen del proletariado (hacia quien la política burguesa es "inmutable" en un período ya histórico), hay en el territorio del Estado español unas masas populares poco propicias a una articulación tan grosera y simplista entre la "sociedad civil" y la "sociedad política" (el Estado de clase) como la que inauguraba el gobierno de Arias Navarro. En efecto: la debilidad organizativa del MO y P en un momento de desconcierto por la incapacidad de asimilación e interpretación del carrerazo; la situación de ofensiva política y represiva del nuevo gobierno que iniciaba su acción con gran empuje programático; la acción reformista de bloquear toda lucha en defensa de Puig Antich favorecía la tenebrosa "lógica" que ha presidido la acción criminal del gobierno Arias, apoyado por una "lógica reformista" no menos tenebrosa en relación con la auténtica defensa de las masas populares.

Sin embargo, la respuesta popular ha sido intensa a posteriori. La noticia del asesinato sobrecogió a amplios sectores populares y, en - bloque a todo el frente de la ensñanza de Cataluña y resto del Estado español; se rompió casi espontáneamente el corsé reformista,se le desbordó en la calle y en la lucha contra la polícia y, en fin, se le obligó a efectuar u na pirueta (incluso verbal: se paso de hablar de la ejecución de Puig Antich al asesinato de Puig Antich en los papeles reformistas) y sumarse al remolque (oficios y funerales, ofrendas devotas, etc.) de las iniciativas surgidas desde abajo. Esta semana de acción de las masas populares disipó el espejismo del discurso de Arias. ¿Nadie pudo oir en colmados, quioscos, bares los comentarios de la gente?. ¿No mostraban, precisamente, desconfianza frente a las palabras -"son los mismos de siempre"- o lá razón que presidía sus dudas y que se confirmaba -"como iban a cambiar"-?. Ni frente a las capas que intentan atraerse -profesionales liberales, pequeños intelectua

les-, ni frente al pueblo común puede la burguesía -por medio del gobierno de Arias Navarro lebarse de los límites objetivos que su objetivo de clase ha configurado en la sociedad española surgida de la guerra contrarrevolucianria por ella desatada. Este no es un problema ético ("egoismo") sino un resultado político que pesa históricamente sobre la burguesía y que la ha situado en un terreno defensivo como clase dirigente. Precisamente, su gran problema estratégico consiste en poder articular "sociedad civil" (esa sociedad del "desarrollo", de los dos mil dólares per capita) y"sociedad política" (ese Estado, esa clase política en sentido estricto) sin tener que estar continuamente sometiendo a la primera a las puras leyes de la superestructura represiva, al dictado de un instrumento cuyo prisma clasista aparece con una transparencia que ciega a los ojos más opacos.

La burguesía no es una camarilla palaciega, ni el Estado por ella consolidaddo (y viceversa) es un reducto exclusivo de generales sanguinarios, pero la sociedad española, a su vez, no es solamente burguesía y proletariado, cuya contradicción antagónica aparece unas veces en primera instancia y otras por mediaciones, y, particularmente, en distintos frentes de la lucha de clases, con momentos desiguales y avances complejos, afectando a capas y clases situados en todo el tejido social y sometiéndolos, objetivamente, a una u otra política de clase. El proletariado no ha madurado todavía una teoría capaz de asimilar toda la problemática que esto encierra en la actual formación social española; la burguesía tampoco. Sin embargo, esta comienza ya a entreveer el problema, precisamente porque los últimos años han supuesto cambios fundamentales en la estructura social española que exigían una actuación de la "sociedad política" que el Estado franquista ha sido XXXX incapaz de llevar a cabo. Para ello, un sector de la fracción hegemónica en el Poder (directa o indirectamente, pero orgánicamente ligado a aquellas necesidades políticas, al contrario que otros sectores no relevantes actualmente para la burguesía como democristianos de izquierda o social demócratas a la europea) ha ido alumbrando penosamente una corriente "centrista" que desearía verse como la doctrina capaz de asimilar para la burguesía a ese cuerpo social que se dispara. (Veanse los últimos editoriales y artículos de fondo -Gonzalez Seara, Alejandro Muñoz Alonso- de CAMBIO-16, por ejemplo; la influencia "centrista" en Silva Muñoz, en el propio Solís, como ideología de recambio). Ahora bien, apresuremonos a señalar que, precisamente por aquel lastre histórico de partida, el gobierno Arias ha debido y deberá garantizarse el control sobre las masas en momentos de crisis (económica en los próximos meses; rodaje del propio gobierno; recomposición de la política educativa; etc.) arrinconando las pocas tentativas de integración elaboradas por los ideólogos centristas como sudedaneo de las autenticas necesidades y aspiraciones de las masas obreras y populares.

En cualquier caso, el problema burgués es que lo debía ser el circulo "protector" (represión) de la hegemonía invade el espacio estrategicamente reservado a esta; ese espacio ideológico y político que los "centristas" (Fraga, Ortí Bordas, Cisneros, los de CAMBIO-16, el propio Areilza, Silva Muñoz, etc.) quiere ocupar en el postfranquismo juancarlista para inyectar cemento al edificio de la dominación.

En este sentido, el "centrismo" se nos muestra no meramente como una ideología, sino como una necesidad política, anclada en la realidad de

la política burguesa. Es decir, que, de un modo u ptro, la burguesía debe afrontar menos una etapa de relación puramente política XXXXXXX con el cuerpo social ("asociaciones", "elecciones", etc.) que una etapa de relación ideológica, de actuación creible como clase de cara a la capas intermedias que, a su vez, vehiculen por medio de intelectuales, --profesionales, mass-media, la propia Iglesia "aperturista" esa relación ideológica hacia el proletariado, "cuyos" partidos u organizaciones reformistas han preparado ya el terreno: si el problema capital es de la "libertad", el de la "democracia", ¿qué impide alcanzar estas de modo gradual, pacífico y por debilidad, descomposición o aislamiento del Estado franquista, rompeolas de la reacción?.

Anteriormente (vease artículo "Estrategia burguesa y lucha anticapitalista", Cuadernos Rojos, noviembre 1972) ya nos referimos a la cuestión "centrista". Decíamos más o menos, que el aparato político del capitalismo español tenía que remozarse, que la puesta en práctica del juego de las asociaciones basadas en las leyes fundamentales era algo inaplazable para la burguesía española, y que esas asociaciones reflejarían estrictamente las opiniones políticas de los diversos sectores sometidos al capital monopolista o portavoces directos del mismo. Las máximas concesiones se traducirían en alguna asociación recogedora de las opiniones de las -"clases medias" (un Eduardo Tarragona como vocero, pongamos por caso), -ya que esos pequeños y medios propietarios, altos asalariados, gentes --todas con un receloso sentido de la propiedad rpivada, eternos temerosos del proletariado insdustrial, jugarían el papel de tapón amortiguador del empujo social y político del proletariado y, al mismo tiempo, serían el soston "de masas" del grotesco "juego democratista", de la "ilusión de poder" de las asociaciones basadas en la ley fundamental del Reino: la propiedad privada de los medios de producción. Deciamos tambien que en ese tinglado no tendrían lugar quienes pusieran en duda aquella "ley -fundamental". Así, XXXX la clase obrera, en tanto que enemigo natural y privilegiado del orden capitalista, no iba a entrar en el juego. En --las asociaciones no habrá sitio para ella: si acaso, en las "asociaciones sindicales", otra etapa aperturista donde las haya.

A todo este apartado de relación puramente formal entre el Estado --burgués y las capas medias hay que añadir el comento: la "participación", tambien meramente formal pero ideológicamente relevante. pero hay también otras claves: todo el problema de la recomposición educativa, por ejemplo.

En este caso, aparte de que la burguesía española se muestra incapaz de segregar una ideología directamente hegemónica (en el sentido de una concepción del mundo) -aunque lo consiga indirectamente y con retazos: tecnocratismo y consumismo, cuya precariedad es tal que depende de los momentos económicos; valores transmitidos por los mass-media, o formados a partir de instituciones como la propia escuela primaria y media, la --Iglesia y sus canales educativos y sociales- y el cuerpo de "grandes intelectuales" a su servicio no puede desarrollar practicamente los postulados ideológicos, es decir, la oclusión de la realidad clasista de nuestra sociedad, que la Ley de Educación encerraba como lo "ideal" (oportunidades y títulos para todos) y se muestra, ciertamente, con una política de clase descarad y sectaria una vez más, y en esta ocasión donde más escue ce a las XXXXX capas medias, la selectividad, o, sencillamente, la -----

canalización de masas hacia la baja enseñanza técnica, la formación profesional o el tíulo de bachiller, la de élites o minorias hacia la enseñanza superior. Selectividad en su sentido más amplio que no puede tapar con ninguna máscara el clasismo que conlleva, y que necesita, además, la cohesión del profesorado entorno a esta dirección clave de la política burguesa. Sin embargo, el problema político no se resuelve señalando límites objetivos sino viendo como una clase mueve sus peones para salvar tales límites: en este caso, mientras la burguesía afronta con decisión la recomposición del aparato escolar a medio plazo, la pequeña burguesía anda desorientada, fraccionada, limitada a la estrecha política reformista que la ha dirigido en los últimos años, y el proletariado carece de poder para poder entrar en esta arena (poder de iniciativa política se entiende).

El gobierno Arias, al fin y al cabo, conjuga sintéticamente todo el ramillete de opciones orgánicas de la burguesía en el momento actual y a medio plazo: hegemonía represiva, desarrollismo exasperado, grageas de consentimiento. Esto es lo que "se ve" en la escena política. Los dos primeros apartados condicionan extraordinariamente al tercero, cuya autonomía es muy limitada en cuanto a contenido y ámbito de aplicación; de ahí que una de las claves de la estrategia proletaria consista en disolver (sin tragarselas) definitivamente tales grageas que tan generosamente exhibe la burguesía frente al cuerpo social. En este sentido, por ejemplo, la lucha antirrepresiva no sólo tiene un caracter de defensa política (agrupamiento de las masas populares en torno al proletariado), sino que conduce a acular a la burguesía contra la pared de sus límites de clase puramente dominante: la aisla en su intento de acercarse timidamente al cuerpo social obligandola a jugar fuerte y abiertamente en el terreno represivo contra todo el MP, sin que pueda desarrollar la línea "centrista" y permite al proletariado echar las bases de una alianza no sólo antifranquista, ya que la burguesía que quire soltar lastre de la sangrienta herencia franquista, se ve obligada a mostrarse ante las otras clases dominadas, en toda ocasión y con todo motivo, como la clase capitalista que siempre ha estado junto al Estado franquista en los últimos 38 años.

Sin embargo, hay también lo que "no se ve" en la arena política, es decir, los intentos hegemónicos capilares, que suministran con-sentimiento por parte de las capas medias y del propio proletariado de un modo solapado. Frente a ellos la política anti (si ya sirve de poco en lo que "se ve") no vale casi nada a largo plazo, es decir, en sus dimensiones estratégicas.

Así,la recomposición educativa no es problema solamente de lucha antiselectiva, sino de introducción de las condiciones y presupuestos ideológico-políticos capaces de dar iniciativa al proletariado en este terreno y atraerle a las masas pequeño burguesas a la deriva. Algo semejante ocurre en el campo de las profesiones liberales, de toda la pequeña intelectualidad capaz de transmitir y vehicular la ideología dominante (comportamiento, moral, etc.). Por esta razón la intervención táctica tiene aquí unos límites que se encuentran en la imposibilidad que ha tenido el proletariado de desarrollarse teórica y políticamente como clase dirigente durante los años del franquismo. Sino nos equivocamos la hegemonía reformista proporciona la clave principal del problema. Y sin entender y asumir críticamente la función y el papel del reformismo, es decir, no

sólo atancandolo verbalmente, los avnces serán mucho más lentos en provecho de la burguesía. Es hora pues, de ajustar cuentas con el reformismo -críticamente, es decir, teórica y políticamente- como garantía de los resultados finales de la intervención concreta y táctica, a fin de pasar a otra etapa de lucha general, que debería incar sus raíces en toda la problemática global que se le plantea al proletariado para poder erigirse en clase dirigente . Esa condición de absorción en una sola estrategia revolucionaria de todos los problemas de todas las clasessometidas frente a la clase dominante es uno de los problemas políticos que se vislumbran hoy con mayor claridad.

PROCESO "1001" Y LUCHA ANTIRREPRESIVA

Hemos vivido en este inverno que acaba de concluir, las cotas más altas que ha alcanzado la represión política en los últimos diez años: los 150 años de condena a Marcelino Camacho y a sus compañeros y el asesinato de Salvador Puig no son más que ejemplos que destacan por su dramatismo entre el panorama de centenares de detenciones, condenas y actos represivos. El caracter de esta represión, su condición de componente necesario dentro de la estrategia de la burguesía en la presente fase de acumulación violenta de capital, viene siendo analizado por nosotros desde hace ya tiempo en sucesivos trabajos. En este mismo número de Cuadernos Rojos, el análisis de la nueva situación política creada por el gobierno Arias identifica el papel en primer plano que va a jugar la represión en toda la etapa de transición al postfranquismo. El presente trabajo quiere aportar algunos elementos de refleción al inaplazable esfuerzo de elaborar una política antirrepresiva correctamente adecuada a la presente fase de lucha.

Nuestra primera constatación es la siguiente. La campaña alrededor del proceso de Camacho y sus compañeros ejemplifica insuperablemente toda una concepción de la lucha antirrepresiva, integrada dentro de la estrategia política del reformismo. De ahí que su evidente fracaso expresa, a nuestro juicio, el fracaso de toda esta concepción. En otro sentido, la ejecución de Salvador Puig revela que, en ausencia y al margen de los criterios de lucha reformistas, no existe siquiera un esbozo de otra política antirrepresiva, con criterios revolucionarios, que sea una alternativa a la anterior.

Para el P.C. - P.S.U.C. y sus aliados en el campo del reformismo, el proceso 1001 ha sido el principal eje de movilización y el centro de interés de las luchas de masas a lo largo de todo el año 73, desplazando a otras muchas situaciones conflictivas y hechos políticos, objetivamente de mayor trascendencia, a un segundo plano. Pero significativamente, parece como si la misma máquina burocrática que impuso con obsesivo afán el tema de Camacho y sus compañetos haya decidido ahora olvidar y hacer olvidar la campaña y sus resultados. Tras el juicio, se ha hecho el silencio más total sobre el tema. La razón: la campaña pro Camacho ha terminado en un fracaso sin precedentes y lo que es peor ha dejado al descubierto la esterilidad y vaciedad de toda la concepción de lucha antirrepresiva que propugna el P.C., como más adelante intentaremos demostrar.

No es la primera vez que esto ocurre: forma parte de la práctica histórica del P.C., por lo menos en sus últimos quince años, ir dejando atrás las grandes jornadas de lucha, las movilizaciones a fecha fija, los llamamientos a acciones decisivas,indefectiblemente terminados en fracaso cuando no en catástrofe, sin la menor valoración objetiva de los resultados, sin la menor autocrítica, sin el más elemental análisis político del balance de la campaña.

Atrás van quedando las víctimas de la represión, los militantes defraudados, los esfuerzos y sacrificios inútiles.

Con el proceso 1001 está pasando igual. Las dóciles bases del reformismo, los simpatizantes movilizados para esta ocasión, se van a quedar sin una explicación política que valore los resultados de la campaña en función de sus objetivos, que justifique su planteamiento, desarrollo y conclusión dentro del proceso estratégico en que está inserta. Para las direcciones reformistas es un tropiezo más a olvidar, y a otra cosa. Pero nos consta que en amplias zonas de la militancia de las organizaciones reformistas el proceso 1001 sigue abierto y se están exigiendo explicaciones a fondo, que vienen a agudizar la ya profunda crisis de algunas de estas organizaciones, especialmente Comisiones Obreras, sin duda la más afectada por el triste desenlace de la campaña. Por primera vez, cuadros responsables de la organización y militantes destacados del P.C.-P.S.U.C. se permiten criticar públicamente a menudo con gran dureza, la postu-

ra oficial de la dirección ante esta cuestión -para no mencionar las críticas a que son sometidas las declaraciones de Carrillo sobre los hechos de Carrero y -Puig Antich- sin que se tome contra ellos las habituales medidas disciplinarias.

Para nosotros sacar ahora a relucir la penosa experiencia del proceso 1001 no obedece a un gusto malsano de hurgar donde más duele, ni de aprovechar una evidente derrota del P.C. para lograr con poco esfuerzo una fácil victoria verbal sobre el reformismo. Tampoco se trata, por descontado, de ajustar las cuentas con unos hombres concretos -los procesados- cuya honestidad personal como militantes obreros no discutimos, pero a los que tocó un papel bien poco lúcido en esta tragicomedia. Nosotros pensamos que el proceso 1001 sigue mereciendo una atención especial porque ejemplifica toda una forma de entender la lucha antirrepresiva, e ilumina poderosamente el contenido contrarevolucionario de la política del P.C.

El P.C. planteó la campaña bajo unos criterios que podríamos calificar de "clasicos", tanto por su forma como por su contenido. El sentido político de la campaña, los objetivos que se pretendían cubrir, las formas de lucha adoptadas no -difieren sustancialmente de otras muchas campañas y movilizaciones que a lo largo de los años ha ido promoviendo el carrillismo. La diferencia estriba en el caracter global que se quiso dar a esta movilización, en su duración extraordinaria en la utilización al máximo de todos los recursos y resortes organizativos, propagandísticos y agitatorios, en el interior como internacionales, del P.C. y sus aliados y las distintas organizaciones de CC.OO. que controlan. El objetivo explícitamente declarado era llegar a una prueba de fuerza con el régimen que dejara pequeño al Proceso de Burgos.

Hasta tal punto la campaña pro libertad de Camacho y sus compañeros llegó a -convertirse para las organizaciones reformistas el eje de toda su actividad a lo largo del último año, que en muchos momentos los planteamientos de lucha reivindicativa y solidaria habituales quedaron relegados al objetivo de reservar fuerzas para la campaña.

Con ello se expresa lo que estimamos un primer vicio de la campaña: la supeditación de los objetivos propios de la lucha del movimiento obrero, incluso en su nivel más elemental, a la consecución de unos objetivos políticos que, como -veremos más adelante, son en absoluto contradictorios con los intereses revolucionarios de la clase obrera.

Asimismo, la campaña ha significado la realización en su grado más alto del -conjunto de criterios que vienen determinando la actuación de Comisiones Obreras y que no son sino la expresión del contenido contrarrevolucionario que ha impuesto a dicho movimiento la dirección reformista, así como la culminación del proceso de supeditación de Comisiones Obreras a los objetivos políticos del P.C.

Dichos criterios de actuación son los siguientes:

a) Intento de dirigismo de las masas, mediante la agitación y la propaganda,-desligado de todo esfuerzo de organización y educación política de la clase.

b) Planteamiento de la lucha en términos triunfalistas de decisivas jornadas generales de lucha a fecha fija, sin conexión alguna con las necesidades -de la lucha en la fábrica.

c) Popularización de líderes, personalizando la represión en unos nombres y -rostros concretos.

d) Legalismo llevado a las consecuencias más extremas. Énfasis en los planteamientos jurídicos y procesales. Centralización del interés en el día del -juicio y en la actuación de los procesados y sus defensores.

El contenido antirrepresivo de la campaña.

El contenido de la campaña se centró en la lucha contra la represión. El planteamiento es éste: hay que evitar que sobre los diez de Carabanchel, abnegados militantes obreros, el régimen franquista descargue monstruosas condenas. Hay que luchar contra un sistema represivo que hace posible tales enormidades.

¿Cómo plantea el reformismo el hecho de la represión? Para el reformismo la represión acentuada de estos últimos tiempos, que se ejemplifica en las increíbles peticiones de pena para Camacho y sus compañeros y en el asesinato de Puig Antich, no es más que la expresión de impotencia de una oligarquía acorralada que, sin base social ni política sobre la que apoyarse, mantiene su dictadura mediante la indiscriminada agudización de los resortes represivos.

Partiendo de su ignorancia sistemática del contenido de clase de la dictadura franquista, el planteamiento antirrepresivo del reformismo desconoce el verdadero papel de la represión dentro de la estrategia de la burguesía, su inserción en el proceso real de la lucha de clases como expresión de la necesidad del capitalismo español de proseguir su desarrollo económico mediante la explotación violenta de las clases populares.

Para el reformismo, la represión es un simple problema de falta de libertades democráticas formales. El reformismo viene a decir: si la policía mata a tiros a los obreros en lucha es porque en España no está reconocido legalmente el derecho de huelga; si el T.O.P. condena a veinte años de prisión a Camacho es porque en España no existen las libertades de reunión y asociación.... El problema de España se reduce a un problema de libertades políticas. Ah, si hubiera libertades...!

De ahí arranca el planteamiento político central de la campaña del 1001. Con perfecta coherencia con toda su estrategia, el reformismo ve en la lucha antirrepresiva el campo de batalla privilegiado de su contradicción con el régimen, el punto de intersección de todos sus intereses políticos. Si la represión es el <u>resultado</u> de la falta de libertades, la lucha antirrepresiva es precisamente la lucha por las libertades democráticas y, por consiguiente, el punto de confluencia de todos los sectores sociales y políticos interesados en el cambio democrático, es decir, en la óptica reformista, todos menos la camarilla de oligarcas en el poder. Lógicamente, la lucha antirrepresiva se convierte para el P.C. en el banco de prueba definitivo de su "pacto por la libertad".

Claro está que para llegar a estas conclusiones ha sido preciso vaciar previamente de todo contenido de clase a la lucha antirrepresiva, consecuencia lógica del abandono por parte del P.C., convertido en explícito baluarte del orden burgués, de toda perspectiva revolucionaria que suponga poner en cuestión el sacrosanto principio de la propiedad privada de los medios de producción.

Integrada la campaña del 1001 en la estrategia política del pacto para la libertad, mediante la centuación del contenido antirrepresivo -en el sentido reformista- de la misma, la totalidad de los planteamientos de lucha habían de quedar necesariamente supeditados al objetivo supremo de conseguir que la campaña fuera el punto de coincidencia del P.C. con sus presuntos aliados democráticos. En la práctica, ello significó un constante rebajamiento de objetivos y formas de lucha, hasta hacerlos aceptables por los sectores burgueses de la "oposición evolucionista" del régimen, destinatario preferente de todas las iniciativas del P.C. en la presente fase.

En este sentido, el punto culminante de la campaña y su mayor éxito, a los ojos del reformismo, se produce cuando Ruiz Giménez y José Mª Gil Robles accedieron a asumir la defensa de dos de los encartados. No hemos de hacer ningún esfuerzo para imaginarnos el inmenso placer, la sensación triunfal que debió

embargar a Carrillo y los suyos ante la perspectiva de ver a Marcelino Camacho, un público y notorio dirigente comunista, obrero por más señas, defendido ante el Tribunal de Orden Público por un ex-ministro de Franco, miembro todavía antea yer de la Hermandad de Alféreces Provisionales y dirigente máximo de la fracción más ortodoxamente vaticanista de la burguesía española. Por si ello fuera poco, dentro del contexto de una amplísima movilización antirrepresiva, destinada a sacudir hasta los cimientos a la dictadura. Se trataba, qué duda cabe, de la ejemplificación espectacular de la política de reconciliación nacional, de la clamorosa confirmación del éxito de la política de acercamiento a los católicos. El mismo sentido tomaba la presencia entre los defensores de Francisco de Cossío -catedrático y decano del Colegio de Abogados de Sevilla- y de Marcial Fernández Montes -antiguo fiscal del régimen. El caso de Gil Robles es todavía más significativo. Es sabido que el P.C. jugó todas sus cartas, con tenacidad inagotable, hasta vencer la repugnancia del viejo santón del fascismo español a mezclarse en un asunto de "comunistas". Finalmente, se logró que aceptara defender a García Salve, el sacerdote obrero del grupo. A continuación hubo que convencer a García Salve, posiblemente el militante obrero más consecuente y con una postura más digna entre los diez de Carabanchel, para que admitiera a regañadientes una defensa tan obviamente aberrante. Para el P.C. era preciso que, por encima de todo, el juicio del 1001 prefigurara esta alternativa "democrática" al franquismo en la que toenen su sitio hombres de "todos los colores", como sin sonrojo ha dicho Carrillo.

Comisiones Obreras y el movimiento obrero reformista en general han tenido que pagar caro su servil instrumentalización al servicio de los planes políticos del P.C. Una vez más, el "pacto por la libertad", el intento de articulación de una amplia alianza antifranquista con la burguesía "liberal", se ha traducido en la supeditación total de los planteamientos obreros, incluso los más reformistas, a los intereses políticos inmediatos de determinados sectores burgueses, interinamente marginados a un papel de oposición respetuosa pero con indisimuladas ambiciones políticas para el futuro, y cuyos objetivos políticos particulares son, desde luego, perfectamente integrables en una estrategia global de la burguesía para el mantenimiento de su dominación de clase.

Lo que pudo ser y lo que fue la campaña.

La campaña del 1001 encerraba potencialmente diversos contenidos. Hemos visto que el P.C. desarrolló con preferencia, y al final con exclusividad, el contenido antirrepresivo de la campaña, integrándola en su estrategia de pacto interclasista. Pero para el mismo P.C., y con toda claridad para Comisiones Obreras, la campaña había de cumplir otro objetivo de primera envergadura: la reivindicación del sindicato obrero de clase. Para Comisiones Obreras (nos referimos siempre a su versión reformista) la campaña significaba la posibilidad de darse a conocer como alternativa válida y atractiva a la situación actual de falta de libertad sindical, mediante la denuncia de la represión ejercida sobre sus dirigentes más conocidos, mediante la popularización de sus planteamientos como embrión del futuro sindicati de clase, mediante la constatación de su capacidad de movilización de amplias masas trabajadoras en acciones de todo tipo.

Este planteamiento está presente en primer plano en las fases iniciales de la campaña, y persistió hasta el final a nivel agitatorio y propagandístico en determinados sectores de la militancia. Pero incluso este planteamiento sindicalista elemental va quedando paulatinamente desplazado a medida que el P.C. se va plegando a las condiciones que imponen los Ruiz Giménez y compañía. Ello va acompañado de un progresivo deterioro de las formas de lucha. Los llamamientos a acciones de masas desaparecen, se descubre de repente que no hay condiciones en las fábricas para hacer nada, después de meses de agitación y propaganda llevada en términos triunfalistas. Se recurre a las formas de acción más atrasadas: recogida de firmas, instancias a las autoridades. Se incrementan las tomas de posición a través de colegios profesionales, jerarquías eclesiásticas, instancias corporativas. Se

polariza la atención en el acto del juicio, convirtiendo lo que debía haber sido una jornada de movilización y lucha de masas contra el régimen en un lamentable espectáculo de acatamiento al ritual jurídico.

La misma degradación sufrieron los contenidos políticos de la campaña. La defensa de Comisiones Obreras, la reivindicación de una organización de clase para los trabajadores españoles, no entraba evidentemente en los cálculos de los Ruiz Giménez y Gil Robles, poco dispuestos a plantear sus defensas como un acto de ruptura con la legalidad establecida. Fue preciso, por consiguiente, abandonar todo planteamiento que superara la defensa abstracta de los derechos naturales de reunión y asociación. El juicio de los diez de Carabanchel dejó de ser el posible juicio político de Comisiones Obreras, como esperaba la militancia, para convertirse en un juicio donde iba a ventilarse el programa cristiano-demócrata de libertades formales y a derrochar retórica de conferenciante sobre los Derechos Humanos, todo ello a costa de unos cuantos veteranos dirigentes obreros, algunos de ellos con muchos años de dirigente del P.C. en las espaldas. Los procesados, siguiendo la lógica implacable que estamos analizando, no vacilaron en renegar de su condición de líderes de Comisiones Obreras, en renunciar a defender el sentido de su lucha, para sumir el papel de esforzados vindicadores del derecho a reunirse en un Convento de Padres Oblatos y acabar prestándose a la indigna componenda que los defensores intentaron negociar con el Tribunal para conseguir unas condenas benévolas...

Circula una versión, propalada por la dirección del P.C., según la cual el fracaso de la movilización prevista para el 20 de diciembre, día del juicio, fué debida al desconcierto creado por la voladura de Carrero. Sin embargo esto es totalmente falso. Cuando se conoció en toda España la ejecución del almirante habían transcurrido suficientes horas del día en cuestión para poder constatar que no se había movido absolutamente nadie ni se habían producido acciones en las fábricas dignas de consideración. No podía ser de otro modo a la vista de las caracterísitcas que tomó la campaña en su fase final y decisiva, de las contradicciones que arrastraba y de la confusión y desánimo que se apoderó de la militancia y de las bases obreras más o menos organizadas. Tampoco tuvo nada que ver el carrerazo con la actitud claudicante que adoptaron los procesados, pues su opción en este sentido era muy anterior y estaba inscrita en el tipo de defensa que aceptaron. Pero lo que si es cierto que el inesperado suceso del día 20 de diciembre permitió desvelar en profundidad, por si podía quedar alguna duda, la absoluta inconsistencia del planteamiento político del P.C. Renunciando a la defensa de Comisiones, haciendo suyo el programa ideológico y político de la burguesía "evolucionista" el P.C. pretendía consolidar la alianza antifranquista. Pero enfrentados ante un episodio real de la lucha antifranquista, de imprevisibles consecuencias para la estabilidad del sistema, pudo verse con claridad cuál era la trinchera que defendían los Ruiz Giménez, cómo se reintegraban al redil y cerraban filas en torno al poder. El juicio, que había de ser un acto de denuncia contra el régimen se convirtió en un acto de adhesión a la autoridad y de repulsa al desorden revolucionario. Un solo acto real de lucha había servido para desbaratar en un momento los hilos, tan laboriosamente anudados, de la alianza antifranquista.

Los resultados

Después de este análisis del desarrollo y triste fin de la camapa del sumario 1001 entendemos que queda justificada nuestra afirmación inicial de que esta experiencia significa el fracaso de la concepción de lucha antirrepresiva que propugna el P.C. y demás organizaciones reformistas. Fracaso que se hace evidente desde la misma óptica del reformismo y en relación con sus mismos planteamientos y objetivos. Fracaso del objetivo de movilización masiva. Fracaso del objetivo de robustecer y popularizar Comisiones Obreras como embrión de un

futuro sindicato obrero, de aúpar unos líderes. Fracaso del intento de frenar la escalada represiva del régimen. Fracaso del objetivo de articular el pacto para la libertad.

Lejos de los objetivos propuestos, el reformismo se encuentra con una militancia descontenta, frustrada y que exige cuentas; con unas Comisiones divididas y desmoralizadas; con unos dirigentes desprestigiados y, para colmo, condenados a durísimas penas. Su única respuesta es el "aquí no ha pasado nada". Para los militantes revolucionarios el proceso 1001 sigue, muy al contrario, abierto, como punto de partida de una reflexión sobre la lucha antirrepresiva que aquí no hemos hecho más que iniciar.